



Colombia Internacional

ISSN: 0121-5612

colombiainternacional@uniandes.edu.co

Universidad de Los Andes

Colombia

Nasi, Carlo

Derechización 'a la colombiana' en tiempos confusos: un ensayo especulativo

Colombia Internacional, núm. 66, julio-diciembre, 2007, pp. 162-183

Universidad de Los Andes

Bogotá, D.C., Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81206610>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

DERECHIZACIÓN 'A LA COLOMBIANA' EN TIEMPOS CONFUSOS: un ensayo especulativo*

**COLOMBIA'S RIGHT TURN
DURING PUZZLING TIMES:**
A Speculative Essay

Carlo Nasi**

recibido 28/09/2007, aprobado 02/11/2007

Resumen

Colombia es una excepción en el actual contexto político latinoamericano, por haber girado hacia la derecha y no hacia la izquierda, contrario a lo ocurrido en otros países del continente. Desde la elección del presidente Álvaro Uribe en el año 2002, se ha producido en el país una creciente polarización política en la que el presidente, con un considerable respaldo popular, encarna a una derecha emergente. El presente ensayo intenta explicar y caracterizar la derechización 'a la colombiana,' teniendo en cuenta sus distintas dimensiones, tales como cierto populismo, la criminalización de la izquierda armada y (frecuentemente) legal, y un gasto social un tanto alejado de la ortodoxia neoliberal.

Palabras clave: Colombia, política colombiana, América Latina, derecha, izquierda, uribismo, Polo Democrático Alternativo.

Abstract

Colombia constitutes an exception in the current Latin American political context: whereas most of the region's regimes have turned to the left, Colombia has turned to the right. Since Alvaro Uribe's presidential election in 2002, the country has become increasingly polarized, and in this course Uribe embodies an emerging right with considerable popular support. This essay explains and characterizes Colombia's turn to the right, a process that reveals different dimensions such as populism, a criminalization of both the armed and the legal left, and social spending priorities considerably distant from the neoliberal orthodoxy.

Key words: Colombia, Colombian politics, Latin America, right, left, uribism, Polo Democrático Alternativo.

La crisis de los partidos tradicionales, Liberal y Conservador, se ha visto acompañada de una reconfiguración de las identidades políticas en Colombia. Desde 2002 se percibe una creciente polarización en el país, donde el presidente Álvaro Uribe aparentemente encarna una derecha emergente y que ha logrado un considerable respaldo

popular, a la vez que el Polo Democrático (antes Independiente, y ahora Alternativo, PDA) se presenta como un proyecto de izquierda renovado, mucho más sólido de los que hubo en el pasado.

Resulta un tanto extraño que, justo ahora, a casi veinte años de la caída del Muro de Berlín, las alternativas de derecha e izquierda se estén fortaleciendo no solamente en Colombia, sino en

* Agradezco a Luis Bernardo Mejía por compartir su conocimiento sobre temas clave de la política económica y social del gobierno colombiano y darme sugerencias para elaborar una sección del artículo, y a Mónica Hurtado, por sus comentarios generales sobre el escrito.

** Ph. D. en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, EE. UU. Profesor y director de posgrados del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Correo electrónico: cnasi@uniandes.edu.co

el continente. ¿Pero por qué Colombia se ha derechizado a contramano de lo que ha ocurrido en varios países del continente, como Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, Nicaragua y Brasil? ¿O es que acaso, como lo sostiene el presidente Álvaro Uribe, es inapropiado hoy en día hablar de derecha e izquierda? ¿Se trata de conceptos obsoletos, carentes de utilidad analítica y de referentes empíricos? Vamos por partes.

El resurgimiento de la izquierda en América Latina

A distintos autores ha llamado poderosamente la atención el reciente acceso al poder de una serie de partidos genéricamente agrupados bajo el rótulo de 'izquierda' en América Latina. Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina, Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Tabaré Vázquez en Uruguay, Ortega en Nicaragua, Lagos y Bachelet en Chile, forman parte de la nueva y variopinta cofradía de presidentes latinoamericanos 'de izquierda', la mayoría de ellos elegidos después del año 2002. ¿Por qué fueron elegidos? ¿Y por qué se verifica una verdadera tendencia regional hacia la izquierda?

Aunque la configuración partidista y trayectoria política particular de cada país explica las condiciones bajo las cuales ciertas organizaciones políticas de izquierda (y no otras) han accedido al poder, algunos autores han aventurado hipótesis más generales a este respecto. Castañeda (2006), por ejemplo, menciona cuatro factores que habrían provocado el 'giro a la izquierda' en América Latina: 1) el fin de la Guerra Fría, que hizo que Washington dejara de estigmatizar a cualquier régimen de izquierda en la región

como simple 'cabeza de playa' de la (ahora ex) Unión Soviética; 2) la culminación del proceso de democratización en América Latina, aparejada con el hecho de que ésta es la región más desigual del mundo; según Castañeda, dondequiera que coexisten democracia y extrema desigualdad, los regímenes políticos tienden a gravitar hacia la izquierda, dado que las masas empobrecidas suelen votar por agrupaciones políticas que enfatizan la redistribución de la riqueza; 3) las reformas neoliberales implementadas desde mediados de los ochenta, cuyos resultados decepcionaron a muchos al revertir en bajas tasas de crecimiento económico, persistencia de la pobreza, creciente desigualdad y altos niveles de desempleo; 4) finalmente, el mismo desencanto con las democracias instauradas, en lo que se refiere a erradicar la corrupción, establecer un Estado de Derecho, mejorar la gobernabilidad y atacar la concentración del poder en manos de unos pocos.

Borón (2005: 410-413) secunda la idea de que el resurgimiento de movimientos y partidos de izquierda se debe a los efectos nocivos del neoliberalismo, pero añade otros elementos explicativos. Según él, una serie de nuevos actores políticos de izquierda tomó el lugar de los grupos que estaban en franco declive (como los sindicatos) y explotó el 'vacío de poder' creado por el descrédito de muchos partidos políticos tradicionales. Además, atribuye Borón el resurgimiento de la izquierda a la revitalización de un activismo contestatario internacional, al formarse un movimiento global en contra del neoliberalismo, y la guerra a partir de las protestas de Seattle, en 1999.

Aunque las anteriores explicaciones contienen elementos analíticos valiosos, dejan algunas preguntas sin contestar. Por ejemplo, ¿por qué las masas empobrecidas no se volcaron a respaldar a los partidos de izquierda antes, en particular, hacia finales de la 'década perdida' de los ochenta, cuando hubo retrocesos importantes en materia de crecimiento económico, pobreza, desigualdad e hiperinflación? ¿Por qué los beneficiarios políticos de la crisis de los ochenta fueron los partidos políticos que introdujeron las medidas del Consenso de Washington, en vez de la izquierda? Y si América Latina ha sido por décadas la región con mayores niveles de desigualdad en el mundo, ¿por qué no ganaron los partidos de izquierda inmediatamente después de que se acabaron las dictaduras? ¿Por qué hubo que esperar tantos años para que ocurriera el 'giro a la izquierda'?

Esping-Andersen (1990: 17) brinda parte de la respuesta, al recordarnos que es erróneo asumir que los partidos de izquierda (socialistas/comunistas) han sido el 'canal natural' de representación de los sectores menos privilegiados. Históricamente las masas empobrecidas y los trabajadores han sido movilizados por una variedad de conductos organizativos distintos, como la Iglesia y los partidos nacionalistas, y por asuntos que poco tienen que ver con la clase social, como es el caso de las reivindicaciones regionales, 'étnicas' y culturales.

De hecho, al cabo de la década perdida, accedieron al poder en América Latina varios políticos populistas que

no necesariamente provenían de los partidos de izquierda. Éste es el caso de Ménem¹ y Fujimori, quienes en sus campañas electorales lograron movilizar a amplios sectores populares mediante promesas redistributivas y prebendas personales, pero una vez electos, sorpresivamente, implantaron medidas de ajuste estructural (ver Stokes 2001). Lo que revela lo anterior es que, en ciertas instancias, candidatos de diversas tendencias se valieron de las plataformas políticas de izquierda para acceder al poder, sólo para retractarse después de sus palabras e implementar el Consenso de Washington.

Otra parte de la explicación es que, especialmente en el Cono Sur del continente, los partidos de izquierda sufrieron mucha represión de parte de las dictaduras. De ahí que estuvieran muy debilitados cuando se produjeron las transiciones a la democracia. Hubo que esperar varios años para que los partidos de izquierda se recompusieran en lo organizacional y formaran una nueva generación de líderes capaces de competir en las elecciones.

Yo agregaría que el ejemplo europeo fue absolutamente decisivo en el resurgimiento de la izquierda latinoamericana². Los partidos de izquierda europeos habían sufrido sucesivas derrotas a manos de partidos conservadores en la década de los ochenta, dada la reducción en el tamaño de la clase trabajadora y el declive en la membresía de los sindicatos (Sferza 1999: 102). De ahí que fuesen obligados a repensar su proyecto político.

1 En el caso de Ménem, algunos autores han observado que históricamente el peronismo fue hostil a la izquierda, acercándose más a los regímenes fascistas europeos.

2 Lo que sigue retoma, en parte, algunas ideas que planteé en el capítulo 5 de mi reciente libro. Ver Nasi (2007).

Con miras a volver al poder, la izquierda europea optó por reinventarse: se distanció de sus bases de apoyo tradicionales (la clase trabajadora y los sindicatos) y adoptó el formato de 'partidos atrapa todo'; abandonó las medidas de bienestar social que históricamente había apoyado y las cambió por una política económica ortodoxa, y también se distanció de la noción del Estado centralista (Sferza 1999). Estas medidas desdibujaban la identidad histórica de la izquierda como tal y la acercaban peligrosamente a sus competidores de derecha.

De ahí que, para diferenciarse, la izquierda adoptó una serie de banderas complementarias, como la antixenofobia, la lucha contra la corrupción, objetivos ecológicos y posmaterialistas, la búsqueda de una mayor paridad de género, así como una mayor y mejor rendición de cuentas por parte de los gobiernos (Sferza 1999; Inglehart 1997). Con este nuevo formato, a finales de los noventa, la izquierda volvió a ganar elecciones en 13 de 15 gobiernos de la Unión Europea (Sferza 1999: 101).

La experiencia europea antece-dió el giro a la izquierda latinoamericana y proporcionó dos cosas. De un lado, apoyo moral, en el sentido de que brindó un efecto demostración de que volver a ganar era posible. De otro lado, y más importante aún, modelos a seguir, dado que la victoria de la izquierda europea necesariamente conllevó transformaciones profundas.

Se puede plantear como hipótesis que, así como la copia de los 'viejos modelos' de la izquierda europea contribuyó al fracaso de la izquierda latinoamericana, la emulación de los 'nuevos modelos' explica su reciente triunfo. Durante la Guerra Fría, y a diferencia de sus contrapartes europeas, los partidos latinoamericanos de izquierda casi nunca accedieron al poder. Esto vale tanto para la izquierda armada como para la pacifista. En cuanto a la primera, aunque prácticamente ningún país latinoamericano estuvo exento de guerrillas revolucionarias³, éstas sólo triunfaron en Cuba, en 1959, y (veinte años después) en Nicaragua, en 1979. La izquierda pacifista y legal, por su parte, tampoco tuvo mayores éxitos, a excepción de la experiencia fallida de Allende en Chile.

En los fracasos incidió no solamente la represión a (y el fraccionamiento ideológico de) la izquierda, sino la importación de doctrinas desarrolladas para el contexto europeo. Los partidos de izquierda latinoamericanos adoptaron el credo marxista-leninista sin tener en cuenta que la industrialización fue mucho más precaria en nuestro continente, y el tamaño de la clase obrera, sustancialmente menor que en Europa. Incluso en aquellos países de América Latina donde la clase trabajadora alcanzó dimensiones considerables, el empleo en el sector secundario nunca predominó numéricamente (Dix 1989).

3 En Argentina operaron los Montoneros, en Uruguay los Tupamaros, en Chile el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en Brasil la Acción Libertadora Nacional, en Ecuador 'Alfaró Vive Carajol', en Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, en Nicaragua el FSLN, en Guatemala la URNG, en El Salvador el FMLN, en Honduras los Cinchoneros y las Fuerzas Populares de Liberación 'Lorenzo Zelaya' (entre otros), en Colombia el ELN, las FARC y varios más, en Venezuela el MIR y las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, en México el EZLN fue considerado una guerrilla por un tiempo, en Bolivia el Che Guevara también formó unos grupos incipientes.

Lo que hubo en América Latina fueron migraciones masivas de lo rural a lo urbano, y el grueso de esta población terminó en los cinturones de miseria que rodean a las ciudades. La mayoría de los migrantes fue absorbida por el sector terciario urbano, el de los servicios, el cual, según Dix (1989: 32), no propicia la solidaridad de clase ni la formación de sindicatos (y menos, de orientación anticapitalista), sino un individualismo cuyas demandas tienden a centrarse en asuntos como la obtención de vivienda y mejoras en los servicios públicos.

De ahí que, aunque la clase baja haya tenido un tamaño considerable en América Latina, los partidos de izquierda encontraron grandes dificultades para movilizar a los sectores pobres. El desfase, por una parte, entre una doctrina política que privilegió al sector secundario como base política de los partidos y, por otra, una estructura social donde la mayoría de los pobres se vinculó al sector terciario fue la receta del fracaso.

No es casual que sólo recientemente la izquierda latinoamericana haya empezado a ganar elecciones: tuvo que adoptar una doctrina nueva, más flexible, pragmática y acorde con la estructura social del continente, para llegar al poder. A semejanza de sus contrapartes europeas, la izquierda latinoamericana se distanció de los sindicatos e incorporó temas como la descentralización y participación de la comunidad en la toma de decisiones locales, la democratización interna de los partidos, la discriminación positiva hacia las mujeres, la necesidad de pesos y contrapesos en el Estado, la administración eficiente de los gobiernos locales y la lucha contra la corrupción (Angell 1996: 11).

Además de renovarse temáticamente, Rodríguez y Barrett (2005: 31-37) argumentan que la nueva izquierda latinoamericana adoptó cinco rasgos que la diferencian de la 'izquierda histórica':

1. En cuanto a la estrategia organizativa, pasó del partido de vanguardia, a los 'frentes amplios', 'coordinadoras' y 'encuentros' de partidos y movimientos sociales. La nueva izquierda consta de coaliciones de organizaciones relativamente autónomas entre sí, que han unido fuerzas para lograr un objetivo común, sea éste la toma del poder o la reforma democrática del Estado, o la autogestión.
2. Las bases sociales de la nueva izquierda se ampliaron, dado que a la tradicional búsqueda de la igualdad, se han agregado agendas que enfatizan el derecho a la diferencia y el multiculturalismo. La nueva izquierda se autodefine en términos heterogéneos y plurales, y sirve como punto de encuentro para todos los que se oponen al neoliberalismo, al imperialismo y a otras formas de dominación y desigualdad.
3. La nueva izquierda también reivindica a la sociedad civil como espacio de acción política y ámbito de deliberación ciudadana, más allá del Estado.
4. La nueva izquierda abandonó la lucha armada y los modelos de socialismo centralizado, con lo que triunfó el reformismo.
5. Finalmente, la nueva izquierda se caracteriza por un inconformismo con la democracia existente: busca ampliar y profundizar la democracia mediante la combinación de mecanismos representativos y participativos.

Lo principal aquí son dos cosas. De un lado, se redujo el fraccionamiento que había plagado a las izquierdas latinoamericanas, no sólo en materia ideológica, donde las peleas entre socialdemócratas, marxistas-leninistas, maoístas, trotskistas y demás crearon distancias insalvables, sino en materia de estrategia de lucha, dado que todas convergieron en el reformismo (y abandonaron la revolución). Por otra parte, las nuevas izquierdas llegaron al poder en la medida en que formaron alianzas heterodoxas, en las que abandonaron la idea de imponer un proyecto único.

Todo esto deja la impresión de una identidad muy confusa. En efecto, ¿qué es lo que define a la izquierda, más allá de juntar a todas las personas que 'se oponen a algo' (sea la globalización, y/o el imperialismo y/o las injusticias)? ¿Es una identidad planteada esencialmente en términos adversariales pero carente de un modelo político-económico propio? ¿Oculta la pluralidad de identidades un falso consenso logrado mediante la postergación de definiciones programáticas? ¿Es la nueva izquierda incapaz de generar propuestas concretas a las que se articulen sus distintos grupos?

¿Cuál Izquierda? y ¿cuál Derecha? ¿Se diferencian?

Una dimensión que históricamente ha diferenciado a la izquierda de la derecha tiene que ver con el tema de la igualdad. Para todas las izquierdas, tanto viejas como nuevas, la búsqueda de la igualdad ha ocupado un lugar central en sus agendas (Bobbio 1996). La existencia de desigualdades se ha interpretado como sinónimo de injusticia, de ahí que las izquierdas hayan

propugnado una mayor igualdad, no sólo en lo político, sino en lo económico y social.

Este planteamiento, aparentemente simple y atractivo, se ha visto plagado de miles de dificultades teóricas y prácticas. En lo teórico, el problema es que es inadecuado hablar de 'igualdad' en singular. Existen distintos tipos de igualdades posibles, las cuales no son necesariamente compatibles entre sí, así como diferentes medios para alcanzarlas. Por ejemplo, dar la misma cantidad de un recurso a todos (igual para todos) es muy distinto a asignar recursos según la necesidad (igual para los que tienen las mismas necesidades), lo que es a su vez muy diferente de asignar recursos según el mérito (igual para todos los que tengan los mismos méritos). Estas tres aproximaciones pueden justificarse en nombre de la igualdad, aunque se contradigan entre sí (para una interesante discusión sobre esto, ver el capítulo sobre igualdad en Sartori 1987).

A los problemas teóricos se suma que, en ocasiones, los planteamientos igualitarios de la izquierda han generado las mayores injusticias imaginables en la práctica. Un caso extremo es el de la guerrilla comunista Khmer Rojo en Camboya, la cual, luego de tomarse el poder, emprendió un delirante intento de convertir a su país en una enorme comuna agraria igualitaria. En este proceso, los Khmers asimilaron la noción de igualdad a la supresión forzosa de las diferencias, lo que los llevó a cometer un genocidio en el que murieron cerca de dos millones de personas (los Khmers ejecutaban sumariamente a toda persona sospechosa de haberse 'corrompido' con valores burgueses).

A pesar de las dificultades reseñadas, es posible argumentar que el *tema* de la igualdad ha ocupado un lugar central en la agenda política de las izquierdas tanto 'viejas' como nuevas'. La derecha, en cambio, suele asumir que las jerarquías sociales son naturales, inevitables e, incluso, deseables para mantener un orden social.

Otro ámbito de diferenciación entre derecha e izquierda tiene que ver con ciertas actitudes. Con base en distintos indicadores del *Eurobarómetro*, Sani y Sartori (1983) observaron que, en los años setenta, la ubicación de un votante cualquiera en el espectro izquierda-derecha era un factor que ayudaba a predecir su posición frente a una variedad de asuntos políticos y sociales⁴. Las personas que se autodefinían como 'de izquierda' tenían un mayor interés en reducir las diferencias de bienestar económico y de género, tenían actitudes favorables hacia la Unión Soviética, los sindicatos, los movimientos estudiantiles de protesta y las organizaciones feministas, mientras que quienes se autodefinían como 'de derecha' solían ser pronorteamericanos y tener una actitud más favorable hacia los grandes empresarios, el clero y la policía.

Varias de estas orientaciones y actitudes siguen teniendo vigencia. No todas, por supuesto, porque hoy no existe la opción de ser prosoviético. Pero, por lo demás, la izquierda tiende a mantener un perfil anti-Estados Unidos y a valorar positivamente a los movimientos sociales contestatarios, al feminismo, a las minorías étnicas, lingüísticas y de género, así como a apo-

yar el aborto, a diferencia de los grupos de derecha. ¿Pero, entonces, se limita el 'ser de izquierda' a dar importancia a la igualdad, y a tener un conjunto de actitudes 'progresistas' frente a un listado de temas? ¿Qué ofrece la 'nueva izquierda' en términos programáticos y de largo plazo?

Aparentemente, muy poco. Distintos analistas y los mismos defensores de la nueva izquierda admiten las dificultades que ésta ha tenido en lo que se refiere a formular propuestas alternativas (Angell 1996: 24; Rodríguez y Barrett 2005: 38-47). En lo económico, la nueva izquierda no ha dado con un verdadero modelo que reemplace al neoliberalismo (Rodríguez y Barrett 2005: 43). Resucitar el socialismo, el keynesianismo o los modelos socialdemócratas de los países nórdicos parece estar fuera de discusión. Lo que se cita, en lo económico, son pequeños experimentos muy parciales que distintos gobiernos 'de izquierda' se han copiado entre sí. Por ejemplo, el programa "Bogotá sin Hambre" del alcalde Lucho Garzón tomó como modelo un programa adelantado por el PT de Lula en Brasil.

Los beneficios de estos programas son incontrovertibles: en Bogotá, por ejemplo, más de setecientas mil personas pobres han gozado de asistencia alimentaria. La pregunta es si se trata de un programa auténticamente 'de izquierda'. Si la memoria sirve de algo, los programas de ajuste estructural también incluían un componente asistencialista, que consistía en una red de apoyo para los más pobres de los pobres que iban a resul-

4 Esto también lo retomo de Nasi, 2007.

tar muy perjudicados por las medidas de libre mercado y la reducción del gasto social del Estado. ¿En qué se diferencia eso del nuevo asistencialismo de 'izquierda'? ¿En que los programas de ayuda 'de izquierda' tienden a ser más permanentes? Y, más allá del deber moral de todo gobierno de contribuir a que ningún ciudadano padezca hambre, ¿en qué contribuyen estos programas a que los más pobres mejoren su situación? ¿Ofrecen algo para rebasar la dependencia de los sectores menos privilegiados de la caridad pública? Dejo estas preguntas abiertas.

Otras banderas de la nueva izquierda, como luchar contra la corrupción, enfatizar los pesos y contrapesos dentro del Estado, favorecer la descentralización o hacer que los gobiernos sean más eficientes y responsables frente a las peticiones de los ciudadanos, también pueden ser (en principio) defendibles y loables. ¿Pero son de izquierda? No necesariamente. No hay que olvidar que varios golpes militares en América Latina buscaron, entre otros, derrocar a gobiernos ineficientes y corruptos, que generaron descontento popular⁵. Es más: los recortes del Estado con el fin de reducir el despilfarro, la corrupción y las ineficiencias de una burocracia numerosa han sido una bandera histórica de los gobiernos de derecha. Dificilmente puede la izquierda reclamar que estos temas son sus banderas exclusivas o distintivas, aunque quizás la izquierda favorece un Estado más interventor.

Por supuesto, no todos los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina han sido iguales, ni han implementado las mismas políticas. Distintos analistas han agrupado a los nuevos gobiernos de izquierda en dos categorías. De un lado estarían los gobiernos de izquierda que se han ceñido más o menos fielmente a la ortodoxia neoliberal (Lula en Brasil, Bachelet en Chile, Tabaré Vázquez en Uruguay), y de otro, los que han intentado deshacer los pasos y revertir muchas medidas del ajuste estructural (Chávez en Venezuela, Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador).

Para algunos sectores de derecha, la izquierda de Lula, Tabaré Vázquez y Bachelet encarna una variante moderada, responsable y madura, que ha aprendido tanto de la teoría económica como de sus pasados errores que provocaron golpes de Estado. La izquierda de Chávez, Kirchner, Correa y Morales, en cambio, sería una izquierda radical, vociferante y populista, destinada a fracasar en sus intentos (Castañeda 2006).

Por su parte, ciertos académicos y activistas de izquierda consideran que la ortodoxia económica de Lula constituye nada menos que una traición a los ideales de su propio partido y a la izquierda continental. Desde esta perspectiva, no se debe tildar a Chávez o a Morales de 'dementes', sino a los gobiernos que se cruzaron de brazos y no cambiaron de rumbo frente a los efectos nefastos del neoliberalismo (Borón 2005: 415).

5 No importa si los regímenes militares subsiguientes fueron aún más corruptos que sus predecesores. Es bastante común que los cruzados de la anticorrupción terminen involucrados en prácticas deshonestas.

Terciar en este debate trasciende los propósitos del presente escrito. Lo que queda en claro es que la izquierda atraviesa por una crisis de identidad caracterizada por la dificultad de generar propuestas alternativas. Algunos analistas (ver, por ejemplo, Borón 2005) argumentan que ello no debe ser motivo de angustia y que se debe asumir una perspectiva más de largo plazo. Al fin y al cabo, también el neoliberalismo surgió gradualmente, como una sumatoria de varios elementos, en el transcurso de décadas. Si hoy por hoy no existe un programa acabado de la nueva izquierda, éste se materializará a su debido tiempo como producto de los varios experimentos a pequeña escala que se llevan a cabo en el continente (y otras partes). Por lo pronto, sostienen los defensores de esta tesis, lo importante es que la nueva izquierda no asuma una actitud derrotista frente al neoliberalismo, e intente caminos que sean novedosos y -sobre todo- *distintos* a los de la derecha. Sólo eso brinda una esperanza a los desposeídos.

La derecha continental, por su parte, no ha afrontado una crisis de identidad comparable. Ha mantenido su credo y principios inalterados, y no tiene por qué cambiarlos. Con todo y el 'giro a la izquierda' en el continente, el hecho de que los nuevos gobiernos de izquierda no tengan propuestas alternativas (que sean articuladas, creíbles y/o viables) al neoliberalismo, les ha servido para afianzar su creencia de que el neoliberalismo es sinónimo de sensatez.

El problema actual de la derecha no es de identidad, sino de identificar estrategias para volver al poder: el neoli-

beralismo no ilusiona a las masas desposeídas con promesas de redención. En esto, la izquierda suele hacer promesas más atractivas. De ahí que los partidos de derecha tengan el dilema de, o bien incurrir en la indulgencia de hacer promesas populistas o, simplemente, esperar a que los desatinos de la nueva izquierda y la creciente inseguridad ciudadana⁶ empujen de nuevo a la mayoría del electorado hacia los taldos derechistas.

Derechización 'a la colombiana'

Con el declive del bipartidismo, ha surgido en Colombia una identidad mucho más claramente de derecha. Aunque el contexto reciente corresponde a un fortalecimiento tanto de la derecha como de la izquierda legal (con la consolidación del PDA como segunda fuerza política de Colombia), es apropiado referirse en general a una derechización del país. De otra manera no se explicarían tanto el triunfo de Uribe en 2002 como su reelección cuatro años más tarde. Las votaciones son dicientes: en ambas elecciones ganó Uribe en la primera vuelta, pero mientras que obtuvo el 54% de los votos en las elecciones presidenciales de 2002, el porcentaje subió a 62,2% en 2006. ¿Cómo ha ocurrido esto y de qué tipo de derechización estamos hablando? Se pueden introducir varias consideraciones a este respecto.

I. Políticas económicas

Un primer aspecto que suele distinguir a los gobiernos de derecha de los de izquierda se refiere a la política económica y el gasto social. Los gobiernos de derecha suelen ser abiertamente neoliberales y (en general) proclives al

6 Los partidos de derecha suelen ganar con sus agendas de imponer orden ante situaciones caóticas y de creciente inseguridad.

libre mercado, mientras que los de izquierda tienden a enfatizar las medidas redistributivas, cierto proteccionismo económico y el gasto social (aun a costa de la eficiencia económica).

Parte de lo sui géneris de la derechización 'a la colombiana' es que, en este terreno, a Uribe se le ha dificultado implementar a fondo una agenda económica propiamente 'de derecha'. En particular, Uribe ha tenido poco margen de maniobra frente al gasto social, que está definido por la Constitución de 1991 y aumenta progresivamente cada año. No se pueden modificar los montos destinados a educación y salud, y como lo afirma Alejandro Gaviria (2005: 68-69), las rigideces en este terreno hacen que cualquiera que hubiese sido elegido presidente no hubiese podido cambiar las cosas en mayor medida.

A esto hay que agregar que Uribe siguió con el programa 'Familias en acción', de Pastrana, que ha tenido un impacto importante y benéfico en ciertos sectores empobrecidos de Colombia (Gaviria 2005). Aunque este programa no hace parte de la política social como tal, al enmarcarse dentro del recetario del Fondo Monetario Internacional de brindar un apoyo focalizado (y temporal) a los sectores menos privilegiados, cerca de 1.500.000 familias de escasos recursos han recibido subsidios por este concepto (*El Tiempo* 2007). Hay que darle crédito a Uribe por haber dado continuidad a este programa.

Esto no quiere decir que Uribe no haya intentado implementar otros aspectos más ortodoxos de la agenda neoliberal. La reducción del tamaño del Estado ha sido sustancial, y eso ha afectado especialmente al brazo social del Estado. El actual mandatario también ha tenido éxito en privatizar, total o parcial-

mente, empresas públicas como Adpostal, Ecopetrol, Telecom y Ecogas, entre otras. Y la reforma laboral le valió a Uribe la animadversión de los sindicatos.

Pero en otros campos, o bien Uribe no ha tenido tanto éxito, o bien no se le puede achacar la culpa. Recuérdese que no le correspondió a Uribe introducir el neoliberalismo, tarea llevada a cabo por su lejano antecesor César Gaviria. Y por diversas circunstancias, pese a los esfuerzos del actual gobierno, Estados Unidos no ha aprobado el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Más allá de la discusión sobre su conveniencia para el país, el TLC habría generado ganadores y perdedores, y los últimos se habrían alinderado en contra de Uribe.

Frente al gasto social, se puede añadir que le correspondió a Pastrana (y no a Uribe) realizar en 2001 una modificación transitoria a la Constitución, el "ajuste a la descentralización", con motivo de la crisis económica que afectó a su gobierno. Con el ajuste, se decidió dejar de girar más de 17 billones de pesos destinados por la Constitución a las transferencias, para el periodo 2002-2008 (Restrepo 2007). Aparentemente, el gobierno de Uribe está intentando volver permanente el recorte a los montos destinados a la salud y educación públicas (Restrepo 2007), lo que le puede acarrear a futuro una pérdida de apoyo. Pero hasta la fecha, con todo y ajuste, los montos para estos rubros han tenido un crecimiento anual permanente aunque modesto.

Una cosa es que el gasto social no haya crecido tanto como lo preveía la Constitución, y otra muy distinta, que se reduzca el gasto social. Lo que ha ocurrido es lo primero, lo que explica en parte la continua popularidad de Uribe y el apoyo por parte de amplios sectores

de las clases medias y populares. Además, es fácil adivinar que el programa 'Familias en acción' le ha proporcionado una amplia base social al uribismo. No es que Uribe sea un presidente 'de derecha' con una política económica 'de izquierda', pero lo curioso es que lo que el mandatario no ha logrado en materia de aplicar medidas neoliberales, le ha reportado ganancias políticas.

En donde sí se detecta una agenda económica claramente de derecha del actual gobierno es en el gasto militar. Los gobiernos de derecha, históricamente, se han caracterizado por privilegiar el gasto en seguridad y defensa, y éste ha crecido a niveles sin precedentes durante la administración Uribe. Las circunstancias de conflicto armado en Colombia justifican tener un gasto militar elevado, pero se requiere mantener la prudencia fiscal y sopesar la sostenibilidad del gasto militar actual. En cualquier caso, al efectuar sumas y restas, se trata de una política económica sólo parcialmente 'de derecha', lo que diferencia a Colombia de otros regímenes ubicados en el mismo lado del espectro político.

II. Relación con los grupos armados ilegales

En Colombia, todos los partidos políticos legales critican abiertamente a la guerrilla por los homicidios, atentados, secuestros y extorsiones que comete a diario. En esto no se detectan mayores diferencias entre los partidos uribistas

(principalmente, el Partido de la U y Cambio Radical) y el izquierdista Polo Democrático Alternativo. Donde sí se observa un talante claramente derechista del gobierno de Uribe es en la forma en que trata a las guerrillas. No me refiero tanto a los frecuentes excesos verbales del presidente⁷, o a las metáforas que utiliza (afirmaciones como "hay que matar la culebra"), que son producto más de la personalidad de Uribe que de otra cosa.

El talante derechista se observa más en la política de criminalizar a la guerrilla⁸. Antes de Uribe, los gobiernos (o al menos algunos) aceptaban la noción de que los actos y la misma existencia de la guerrilla tenían una explicación política. El origen de las guerrillas se entendía como producto de la exclusión política y económica, y los actos criminales de los grupos rebeldes frecuentemente se cobijaban bajo la doctrina del 'delito político'. Únicamente las fuerzas militares se referían consistentemente a la guerrilla con el epíteto de 'bandidos'.

Con Uribe, lo que antes era un lenguaje exclusivo del estamento castrense se generalizó a todo el gobierno y a buena parte de la sociedad. El gobierno considera que los grupos guerrilleros son simples asociaciones criminales que únicamente buscan enriquecerse a sí mismas. Según esta interpretación, si es que los grupos rebeldes alguna vez tuvieron banderas políticas, éstas se acabaron con el colap-

7 Donde se trasluce claramente su rabia contra las guerrillas; rara vez las rabietas del Presidente se han dirigido contra los paramilitares.

8 Partamos de un hecho cierto: todas las guerrillas son grupos criminales, en la medida en que llevan a cabo acciones armadas al margen de la ley. Sólo desde un imaginario extremadamente ingenuo se puede establecer una clara línea divisoria entre una supuesta 'guerrilla idealista' del pasado y una 'guerrilla criminal' del presente. Aunque la guerrilla colombiana se ha degradado considerablemente en las últimas décadas, incluso las más idealistas de las guerrillas del pasado cometían (quizás a menor escala) toda suerte de actos criminales, como robos, extorsiones, asesinatos extrajudiciales, secuestros y demás.

so del comunismo global, así como con el creciente involucramiento de las guerrillas en el narcotráfico.

La criminalización de las guerrillas corresponde a un talante de derecha, en el sentido de que es una estrategia calcada a la que siguió Margaret Thatcher en el Reino Unido frente al Ejército Republicano Irlandés, IRA, a mediados de los setenta. Thatcher, la así llamada 'Dama de Hierro' del Reino Unido, fue la principal aliada del republicano Ronald Reagan, en la cruzada anticomunista internacional que antecedió el fin de la Guerra Fría.

Los gobiernos británicos posteriores a Thatcher fueron más pragmáticos en esta materia: mientras que públicamente siguieron tachando de criminal y terrorista al Ejército Republicano Irlandés, en secreto empezaron conversaciones con el mismo. El reconocimiento de facto (aunque en secreto) del carácter político del IRA facilitó llegar a algunos entendimientos, en un largo proceso que culminó con los acuerdos de paz del Viernes Santo de 1998. Es decir, la criminalización del IRA fue principalmente una táctica de descrédito, más que una creencia sincera del gobierno. Si no hubiese sido así, la criminalización habría impuesto una barrera infranqueable para construir gradualmente una solución política del conflicto de Irlanda del Norte.

El punto a resaltar es que la criminalización de los grupos armados ilegales ha sido un repertorio típicamente de derecha. Así el rechazo a las guerrillas sea unánime en Colombia, Uribe se destaca por su empeño en asimilar a los grupos

rebeldes a simples bandas delincuenciales, negándoles cualquier agenda política de cambio a favor de los sectores oprimidos. La carga emocional que se detecta en los discursos de Uribe da a entender que ésta es una creencia sincera, más que algo pragmático, al estilo de la "hipocresía constructiva" del gobierno inglés.

Ahora bien, si la tesis de la criminalización fuese sólo una cuestión de Uribe, eso sería entendible, dada su experiencia familiar traumática con las FARC. Lo que llama la atención es que muchos colombianos han aceptado la tesis de la criminalización sin mayores reservas y cuestionamientos. Esto no es algo natural, sino el producto de la confluencia de tres factores.

a) *La experiencia del Caguán, o el 'síndrome de la novia ingenua y traicionada'*

Con el fracaso de las negociaciones del Caguán, se impuso en Colombia la narrativa de que, mientras que el gobierno cedió en todo y obró siempre ingenuamente, de buena fe, las FARC no hicieron otra cosa que engañar y traicionar a todos.

Que las FARC engañaran en el Caguán es un hecho incontrovertible. No vale la pena detenerse en la larga lista de agravios sobre secuestros, narcotráfico, tráfico de armas, extorsiones, planeación y ejecución de ataques, y reclutamiento, tantas veces repetida. Lo que se tiende a olvidar, sin embargo, es la responsabilidad del gobierno en el fracaso de las negociaciones de paz del Caguán. El gobierno también incumplió promesas⁹, y mostró una gran incompetencia en el manejo de las negociaciones¹⁰. Además de la mala fe

9 Empezando porque el Plan Colombia inicialmente iba a ser un plan social, y no una iniciativa militar antinarcóticos.

10 Como se demuestra en la introducción de 100 temas en la agenda y en el rol puramente político y *pro forma* de las comisiones de paz.

de las FARC, las fallas del gobierno contribuyeron -y no en forma marginal- al fracaso de las negociaciones.

Y tampoco es cierto que el gobierno hubiese cedido 'en todo'. Hizo apenas una concesión, que fue grande y equivocada -la desmilitarización de cinco municipios para generar un espacio donde negociar-, pero fue una, al fin y al cabo. Dicha concesión se justificó en su momento con el argumento de que mantener conversaciones de paz en el exterior introducía complicaciones logísticas que dificultaban avanzar en la agenda de negociación (supuestamente, eso contribuyó al fracaso de las negociaciones de Caracas y Tlaxcala). Aparte de eso, Pastrana tuvo la iniciativa de ir a hablar con 'Tirofijo' en momentos de crisis, organizó la 'gira europea' y otros encuentros, pero éstos fueron gestos, más que concesiones propiamente dichas. No obstante, los gestos de Pastrana reforzaron la noción de que el gobierno cedió en todo a cambio de nada.

En resumidas cuentas, a los ojos de la opinión pública, las FARC fueron las únicas responsables del fracaso de las negociaciones del Caguán, lo que reforzó su imagen de grupo enteramente criminal y sin banderas políticas.

b) El establecimiento de un 'ranking delictivo' que potenció las condenas contra las guerrillas

Los delitos no son todos iguales. De ahí que existan diferencias entre contravenciones y delitos, y que las penas se asignen progresivamente, de acuerdo con la gravedad de las violaciones a la ley. Lo que no es tan cierto es que haya un ranking indisputable

en materia de delitos graves y que el secuestro sea el peor de todos ellos. Nadie discute que el secuestro es un delito absolutamente atroz, y es ridículo que la guerrilla acuda a eufemismos (palabras como 'retenciones') para escamotear la gravedad del hecho. Pero con todo el dolor y trauma que causa (a las víctimas y a sus familiares), es difícil argumentar que el secuestro sea algo más grave que el asesinato o las masacres. Es más: a menos que el secuestrado muera en cautiverio, con este delito se mantiene la esperanza de un reencuentro de los secuestrados con sus seres queridos, a diferencia de los asesinatos.

A pesar de la dificultad de establecer gradaciones entre delitos graves, en Colombia se ha consolidado un ranking en el imaginario colectivo, donde el secuestro se percibe como el peor de todos los delitos. En ello ha incidido la eficaz labor de organizaciones que han tomado las banderas contra el secuestro, como 'País Libre', que ha movilizado sentidas y multitudinarias manifestaciones en favor de la liberación de los cautivos. Dichas organizaciones han tenido un mayor impacto en moldear el imaginario colectivo en Colombia que los mismos avances normativos internacionales, que han reducido considerablemente el espectro de los delitos políticos: lo último ha implicado quitar atenuantes a todo un rango de delitos, y no sólo al secuestro.

En Colombia, el posicionamiento del secuestro como el peor de todos los delitos ha facilitado la criminalización de las guerrillas. Finalmente, según las percepciones mayoritarias, las guerrillas quedaron como principales responsables (junto con la delincuencia

común) del más abominable de los delitos. Los paramilitares, que han cometido muchos más asesinatos y masacres, pero menos secuestros que las guerrillas, quedaron comparativamente exentos de tanta condena pública.

c) *La promesa del “ahora
sí vamos a derrotar a la guerrilla”
respaldada por cuantiosos recursos*

El país también ha querido ‘pensar con el deseo’ ante la creciente injerencia de la guerrilla. La guerrilla ha sido un problema enquistado por más de cuarenta años. Su constante expansión en número de hombres y frentes hasta 2002, y su apenas parcial contención desde ese entonces, han significado que su impacto se ha multiplicado a lo largo y ancho del país. De una guerrilla que pasaba casi desapercibida, se pasó a una que desde los años ochenta, con sus acciones, ha causado trauma en muchos municipios y ha afectado a un creciente número de habitantes (aunque su potencial de tomarse el poder sea extremadamente bajo).

Para muchos ciudadanos del común, frente a una guerrilla que no ha hecho más que engañar en las negociaciones, causar un daño creciente y cometer el más abominable de los delitos (el secuestro), sólo existe una respuesta apropiada: derrotarlos completa e incondicionalmente. En esto, Uribe ha sido hábil en interpretar (y potenciar) un deseo colectivo.

Uribe nos ha hecho creer que es posible lograr el mejor de los mundos posibles: acabar con este problema de un solo tajo. Si la mano dura no fue efectiva en el pasado, en particular, durante el gobierno de Turbay, quizás eso se debió a la escasez de legitimidad del gobierno y a la insuficiencia de

recursos militares. Uribe parece haber subsanado ambos frentes. Su apoyo popular es incomparablemente mayor que el que tuvo el desprestigiado Turbay, y además, con el hecho de que Colombia se convirtió en el tercer país receptor de ayuda militar de Estados Unidos en el mundo, la promesa de la victoria militar parece hoy más creíble que nunca.

Criminalizar al adversario ha sido más fácil bajo estas circunstancias: con el viento a favor para derrotar a las guerrillas, ¿a cuenta de qué las vamos a reconocer? Si hubiese menos triunfalismo, probablemente tendría cabida la noción de que es más pragmático buscar una salida política negociada, incluso a pesar del carácter criminal de las guerrillas. Es probable que la criminalización ceda, en la medida en que Uribe sea incapaz de cumplir con su promesa de acabar con las guerrillas en su segundo (¿o tercer?) mandato, y vea la necesidad de buscar acercamientos.

**III. Relación con otros actores
políticos y sociales legales**

El talante derechista de Uribe también se observa en su relación con distintos partidos y grupos políticos. Los contrastes son patentes.

a) *Partidos de izquierda, sindicatos, ONG
de derechos humanos y ‘el pueblo’*

Que el gobierno Uribe criminalice a la guerrilla no es tan grave, especialmente cuando esta última ha proporcionado abundantes argumentos para hacerlo. Quizás uno podría decir que la criminalización es *inconveniente*, a efectos de buscar una paz negociada. Pero, a su vez, referirse a los guerrilleros como criminales es

adecuado -en el sentido de que la palabra denota las prácticas de los grupos rebeldes- y *justificable*, en el marco de una política que busca la victoria militar.

Lo que, en cambio, sí es grave es que el gobierno criminalice a la oposición legal por medio de señalamientos infundados. Abundan los ejemplos a este respecto. El caso más reciente se dio durante la campaña a la Alcaldía de Bogotá, cuando, ante el inminente triunfo del candidato de izquierda del Polo Democrático Alternativo (PDA), Samuel Moreno, el presidente Uribe invitó en repetidas ocasiones a los habitantes de la capital a que “no votaran por el candidato respaldado por grupos terroristas” (en clara alusión a Moreno y las FARC). Pocos días después, tanto el Alto Comisionado de Paz como el Ministro de la Defensa confrontaron en los medios de comunicación al máximo dirigente del PDA, Carlos Gaviria, porque una columna suya había aparecido en la página de internet de ANNCOL, agencia de noticias cercana a las FARC. Se trataba de una columna ya publicada en el periódico *El Tiempo*, y que fue utilizada por ANNCOL sin el conocimiento ni el consentimiento de Gaviria.

Anteriormente, Uribe había tildado a algunas ONG de derechos humanos de “traficantes de los derechos humanos”, como si sus denuncias sobre violaciones cometidas por agentes del Estado fuesen simples

artimañas promovidas subrepticamente por las FARC dentro de una estrategia de “guerra jurídica” contra el gobierno. E, invariablemente, el gobierno ha reaccionado con discursos acalorados cada vez que entidades como Human Rights Watch publican informes sobre Colombia, dando a entender (contra toda evidencia) que dicha organización sólo critica al Estado y no a las guerrillas. En otras oportunidades, distintos funcionarios del alto gobierno han hecho graves señalamientos públicos en contra de algunos sindicatos, e incluso en contra de algunos académicos, sugiriendo una posible cercanía con los grupos terroristas.

Todas estas prácticas intimidatorias del gobierno en contra de personas y grupos de la oposición legal aproximan a Uribe a ciertos regímenes autoritarios de derecha. Nótese, sin embargo, que es inapropiado decir que Uribe implantó una ‘dictadura de derecha’ y (mucho menos) un ‘régimen fascista’. En los regímenes autoritarios propiamente dichos, el gobierno desarticula coercitivamente y prohíbe la existencia legal de cualquier organización de oposición (el fascismo llega al extremo de reconfigurar a toda la sociedad dentro de un único proyecto totalitario de Estado).

Lo que ha hecho Uribe es descalificar a la oposición legal y formularle acusaciones graves de ser ‘desleal’¹¹ (o de estar ‘aliada con el terrorismo’). Aunque esto no equivale

11 Parto aquí de la distinción de Linz (1978), quien afirma que la oposición leal tiene un claro compromiso con los medios legales para llegar al poder y rechaza el uso de la fuerza, mientras que la desleal no. Agrega Linz que la oposición desleal suele mandar mensajes ambiguos, en los que afirma ceñirse a los medios legales para acceder al poder, pero a la vez descalifica a los gobiernos como ilegítimos. La oposición desleal dice representar a una supuestas ‘mayorías latentes’ y apela a formas plebiscitarias de la democracia.

a aplicar coerción ni a introducir prohibiciones legales, sí es un paso claro hacia la intolerancia de la oposición política legal por parte de las más altas instancias del gobierno. De hecho, esto riñe con el espíritu de la "Política de Seguridad Democrática" del propio Uribe, cuya premisa universalista consiste en brindar igual seguridad a todos los colombianos que se mantengan dentro de los cauces de la ley, independientemente de su filiación política. Es muy grave que, en un país con una historia tan violenta como Colombia, un presidente tan popular como Uribe descalifique de esa manera a los grupos de oposición legal (así la oposición resulte en ocasiones bastante irritante). Las memorias de lo ocurrido con la UP (partido mucho más cuestionable que el PDA, pero que no merecía ser exterminado) deberían servir como llamado de atención para no repetir la historia a este respecto.

Por supuesto, a Uribe la táctica de polarizar y dividir a la sociedad entre 'uribistas' y 'terroristas' le ha dado réditos electorales. Y los señalamientos del gobierno contra la oposición son tan sistemáticos que es insostenible la tesis de que el Presidente simplemente reacciona frente a grupos extremistas que lo tildan de 'paraco'. Incluso, suponiendo que eso fuera así, dado el poder y la dignidad del gobierno, un presidente no debería rebajarse a dar peleas donde los epítetos reemplazan los argumentos.

En síntesis, el talante derechista de Uribe se nota en esto también. Mientras que un gobierno democrático de centro cultivaría una estrecha alianza de todos los partidos legales (lo que incluye a los partidos de centro,

centro-derecha y centro-izquierda) en contra del terrorismo y los grupos extremistas, Uribe ha privilegiado la formación de una alianza de la derecha y centro-derecha, que descalifica a la izquierda legal y en poco la diferencia de la ilegal.

Además, las acusaciones en contra de la oposición legal han polarizado al país. En esto, Uribe no ha logrado formar un coro unánime, igual al que condena por 'terroristas' a las guerrillas. Lo que ha producido es una diferenciación y crecientes fricciones entre uribistas y antiuribistas. Paradójicamente, el Presidente ha contribuido a revitalizar la identidad de la izquierda legal, dado que más de una persona injustamente acusada de ser 'aliada del terrorismo' ha acabado en los brazos de la oposición.

Se observa aquí una cercanía entre las estrategias populistas de Uribe y Chávez: en ambos casos (aunque más en Venezuela), los presidentes han escindido a los países entre los que están a su favor y los que están en contra. Para muchos colombianos y venezolanos, la misma historia se divide en un 'antes' y un 'después' de un presidente que es percibido bien sea como redentor (por sus seguidores) o demonio (por sus opositores).

Otro aspecto relevante se refiere a la relación de Uribe con lo que podríamos denominar genéricamente el 'pueblo'. Cuando no ha descalificado a la oposición legal, Uribe ha tendido a obviar a los grupos organizados de izquierda como instancias de diálogo y negociación (a menos que se trate de sindicatos patronales). Uribe parece haber reemplazado la interlocución con los sindicatos y las organizaciones populares por un diálogo

con sectores desorganizados de la sociedad civil o el 'pueblo' en los consejos comunitarios.

Con esto, Uribe, de nuevo, ha hecho gala de un talante populista muy parecido al de su homólogo en Venezuela, Hugo Chávez. Los consejos comunitarios buscan, ante todo, un efecto mediático. Son eventos en los que el mandatario colombiano da muestras de su empatía con 'el pueblo' y, supuestamente, soluciona problemas en vivo y en directo, comisionando tareas a sus ministros y a otros funcionarios del gobierno.

El problema es que la democracia directa es en buena parte una ilusión en las sociedades de masas contemporáneas. Un simple ejemplo numérico es ilustrativo a este respecto. Mientras que a la fecha (luego de cinco años de gobierno) se han llevado a cabo cerca de 147 consejos comunitarios, a los que habrán asistido unos pocos miles de personas (por no mencionar el reducidísimo número de ciudadanos que han hablado en dichos consejos), la población colombiana rebasa los cuarenta millones de habitantes. Es decir, los consejos comunitarios 'han atendido' a una ínfima fracción de ciudadanos. Probablemente, el mismo gobierno selecciona a quienes pueden (o no) asistir a tales consejos, lo que introduce un fuerte sesgo, y nadie hace un seguimiento para ver si efectivamente un ministro cumplió con la tarea encomendada por el Presidente de 'solucionarle el problema' a cualquier fulano.

Los consejos comunitarios no pueden pretender reemplazar ni rebasar a la democracia representativa, y el grado en que la complementan es algo

que requiere de investigación empírica. Su utilidad es fundamentalmente propagandística, porque generan la ilusión de la 'democracia directa', y de que el poder se puede ejercer en forma transparente, frente a los ojos de todo el mundo. De nuevo, esto refleja nuestros deseos colectivos: todos quisiéramos que el ejercicio del poder fuese diáfano, honesto y visible. En realidad, los consejos no eliminan lo que Schedler (1999) denomina la 'opacidad del poder', con la que miles de decisiones del gobierno -y, especialmente, las más importantes- se toman fuera del radar del escrutinio público. No deja de ser interesante, en todo caso, que Uribe acuda al populismo y éste le funcione, elemento sui géneris de la 'derechización a la colombiana'.

b) Empresarios, militares, paramilitares y Estados Unidos

Las relaciones de Uribe con el otro lado del espectro político también pueden ser un indicador útil de la derechización 'a la colombiana'. Indudablemente, Uribe ha tenido una clara y estrecha cercanía con los empresarios y los militares. Una pregunta que se puede formular es si el tipo de relación de Uribe con los militares y empresarios lo hace 'más de derecha' que sus antecesores. Al fin y al cabo, todo gobierno democrático depende no sólo de los votos, sino del apoyo del empresariado y la fuerza pública.

Carezco de elementos empíricos para emitir un juicio a este respecto. Los empresarios y militares siempre han tenido un acceso bastante directo al alto gobierno. Habría que analizar si la interlocución ha sido comparativa-

mente más fácil con Uribe que con sus antecesores. Otra comparación posible, que excede los propósitos de este ensayo, es analizar si estos sectores han obtenido más prebendas del gobierno desde que Uribe accedió al poder. Dejo como hipótesis que Uribe sí ha tenido una mayor cercanía con el estamento militar que sus antecesores. Al menos, no recuerdo otros presidentes tan cercanos a la fuerza pública, con la excepción de Turbay.

La relación de Uribe con los paramilitares ha sido más compleja. Por un lado, ha logrado que estos grupos se desmovilicen y desarmen, y los ha enjuiciado con la controversial Ley de Justicia y Reparación. Aunque el gobierno ha defendido la ley por cuanto propicia menos impunidad que en el pasado, lo cierto es que los castigos son irrisorios frente a la gravedad de los delitos.

Por otro lado, el Presidente ha sido acusado por la oposición de tener nexos con los grupos paramilitares, señalamiento que Uribe ha rechazado vehementemente. Suponiendo que el Presidente no haya tenido un vínculo directo con estos sórdidos personajes, lo que el escándalo de la parapolítica ha dejado en claro es que algunos amigos y colaboradores cercanos del Presidente sí han sido amigos de los paramilitares. Si bien nadie es responsable por los amigos de los amigos, este escándalo ha facilitado que algunos asocien al Presidente con los grupos ilegales de extrema derecha.

Una pregunta que queda abierta es en qué medida la supuesta cercanía del Presidente con estos grupos (o con los amigos de estos grupos) explica la impunidad de los paramilitares. ¿Habría actuado distinto un gobierno

de izquierda? ¿Es el tratamiento benigno a los grupos paramilitares producto de que en Colombia hay un gobierno de derecha? O, dadas las circunstancias, ¿cualquier gobierno habría actuado igual?

Sospecho que en este terreno prima el pragmatismo, y que un gobierno de izquierda no habría propiciado una dosis sustancialmente mayor de justicia y castigo que Uribe (o, de insistir tanto en el castigo, no se habría producido la desmovilización de los paramilitares). Probablemente, un gobierno de izquierda habría sido un poco más receptivo frente a las críticas y sugerencias de las organizaciones de derechos humanos pero, en últimas, habría aceptado pagar el precio de la impunidad, en aras de avanzar hacia la paz.

Lo que ha ocurrido en este terreno es que Uribe, un presidente de derecha, hasta ahora tiene como único logro en materia de paz la desmovilización y desarme de los paramilitares, que son grupos armados ilegales de derecha. Esto se ha prestado para que la oposición arrecie contra el Presidente y explique la impunidad en función de que 'el Presidente es amigo de los paras'. Pero el tratamiento seguramente habría sido igual de benigno si se hubieran desmovilizado las FARC o el ELN. En el marco de la búsqueda de una paz negociada, ningún gobierno, sea de derecha o izquierda, puede pretender que caiga todo el peso de la ley sobre los perpetradores de delitos ni aplicar castigos selectivos, según se trate de grupos armados ilegales de derecha o izquierda.

Finalmente, y para no extenderme más, Uribe ha sido un claro aliado de Estados Unidos, y el princi-

pal receptor de ayuda norteamericana en el continente. Esto lo separa de varias contrapartes latinoamericanas de izquierda, que resucitaron las banderas antiimperialistas y ven en la cruzada norteamericana contra el terrorismo un plan para dominar al mundo. Bachelet aparece como excepción a la regla, en el sentido de que su gobierno ha mantenido una buena relación con la potencia. Pero, en general, la nueva izquierda latinoamericana se ha definido en oposición a Estados Unidos. En contraste, Uribe es un aliado incondicional de ese país, a pesar de los ocasionales roces por temas como la no aprobación del TLC.

A modo de conclusión

Aunque las distinciones se han vuelto más complejas, las diferencias entre derecha e izquierda siguen teniendo vigencia. La izquierda, en particular, ha enfrentado enormes dificultades para definir una nueva identidad programática, luego de la caída de la Cortina de Hierro y la crisis de los modelos socialdemócratas. Lo llamativo es que, con todo y confusión, la izquierda ha logrado ganar elecciones en distintos países latinoamericanos mediante la formación de alianzas heterogéneas de gente inconforme. La nueva izquierda probablemente no sabe exactamente qué es lo que quiere ni cómo lograrlo, pero definitivamente sabe qué es lo que no quiere, y eso ha sido suficiente para galvanizar un considerable apoyo popular en coyunturas electorales.

Colombia es un caso relativamente atípico en la región, por haberse derechizado. El presente ensayo intentó explicar y caracterizar

la 'derechización a la colombiana', teniendo en cuenta una serie de ejes temáticos. La 'derechización a la colombiana' revela distintos grados y matices, según al área a considerar, lo que incluye tintes populistas, criminalización de la izquierda armada y (frecuentemente) legal, y un gasto social un tanto alejado de la ortodoxia neoliberal.

A pesar de las ambigüedades del presente y el tinte sui géneris de la 'derechización a la colombiana', es errado argumentar que los conceptos de derecha e izquierda se han vuelto inservibles y anacrónicos. Seguramente se han transformado y las nuevas identidades son difusas, pero dichos conceptos siguen (y seguirán) teniendo vigencia. Lo que añoro no es el engañoso 'consenso universal' producto del supuesto 'fin de la ideologías', sino un trato diferente entre la derecha y la izquierda en Colombia. Nos falta mucho para avanzar en nuestra precaria democracia, sobre todo en volver anacrónica la intolerancia y la eliminación del adversario.

Referencias

Angell, Alan. 1996. "Incorporating the Left into Democratic Politics". En *Constructing Democratic Governance: Latin America and the Caribbean in the 1990s*, eds. J. I. Domínguez y A. F. Lowenthal. Baltimore y London: The Johns Hopkins University Press.

Bobbio, Norberto. 1996. *Left and Right: The Significance of a Political Distinction*. Cambridge: Polity Press.

Borón, Atilio. 2005. "La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: promesas y desafíos". En *La nueva*

izquierda en América Latina: sus orígenes y trayectoria futura, comps. César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chávez. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Castañeda, Jorge. 1996. "Democracy and Inequality in Latin America: A Tension of the Times". En *Constructing Democratic Governance: Latin America and the Caribbean in the 1990s — Themes and Issues*, eds. Jorge Domínguez y Abraham Lowenthal. Baltimore: Johns Hopkins.

Castañeda, Jorge. 2006. "Latin America's Left Turn". *Foreign Affairs*. Vol. 85, No. 3: 28-43.

De Sousa Santos, Boaventura. 2005. "Una izquierda con futuro". En *La nueva izquierda en América Latina: sus orígenes y trayectoria futura*, comps., César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chávez. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Dix, Robert H. 1989. "Cleavage Structures and Party Systems in Latin America". *Comparative Politics*. Vol. 22., No. 1: 23-37.

El Tiempo. 2007. "A la conquista de los pobres". 11 de noviembre, p. 8, sección 1.

Esping-Andersen, Gosta. 1990. *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton: Princeton University Press.

Gaviria, Alejandro. 2005. *Del romanticismo al realismo social y otros ensayos*. Bogotá: Grupo Editorial Norma y Facultad de Economía, Universidad de los Andes.

Linz, Juan. 1978. *The Breakdown of Democratic Regimes. Crisis Breakdown and Reequilibration*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Nasi, Carlo. 2007. *Cuando callan los fusiles: impacto de la paz negociada en Colombia y en Centroamérica*. Bogotá: Grupo Editorial Norma, Departamento de Ciencia Política y CESO, Universidad de los Andes.

Restrepo, Darío. 2007. "La celada contra las transferencias para la salud y la educación pública". En <http://www.universia.net.co>

Rodríguez, César, y Patrick S. Barrett. 2005. "¿La utopía revivida? Introducción al estudio de la nueva izquierda latinoamericana". En *La nueva izquierda en América Latina: sus orígenes y trayectoria futura*, comps. César A. Rodríguez Garavito, Patrick S. Barrett y Daniel Chávez. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Sani, Giacomo y Giovanni Sartori. 1983. "Polarization, Fragmentation and Competition in Western Democracies". En *Western European Party Systems: Continuity & Change*, eds. H. Daalder y P. Mair. London: Sage.

Sartori, Giovanni. 1987. *The Theory of Democracy Revisited*. Chatham: Chatham House Publishers.

Schamis, Hector. 2006. "A 'Left Turn' in Latin America? Populism, Socialism, and Democratic Institutions". *Journal of Democracy*. Vol. 17., No. 4: 20-34.

Schedler, Andreas. 1999. "Conceptualizing Accountability". En *The Self-Res-*

training State: Power and Accountability in New Democracies, eds. Andreas Schedler, Larry Diamond y Mark F. Plattner. Boulder: Lynne Rienner.

Sferza, Serenella. 1999. "What is Left of the Left? More than One would

Think". *Daedalus*. Vol. 128, No. 2: 101-126.

Stokes, Susan. 2001. *Mandates and Democracy: Neoliberalism by Surprise in Latin America*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.